

Memoria e información para la superación de la violencia de Estado en Colombia*

JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ**
ANDRES PUERTA MOLINA

pp. 141-157

Introducción

Hablar de Colombia en la actualidad implica, irremediablemente, hablar de reconstrucción social, de resiliencia, memoria y reparación, pero también de la necesidad de potenciar el diálogo y la reconciliación como elementos innegociables para construir un nuevo Estado sustentado en nuevos valores en pos de una sociedad pluralista (Cortina, 2009) en la que las palabras silencien para siempre el ruido de las balas.

A la hora de abordar el conflicto armado colombiano y sus escrituras de muerte y dolor tatuadas en el alma de la sociedad civil, resulta inevitable realizar una revisión histórica de los hechos acaecidos hace ahora 16 años en la ciudad de Medellín y, más concretamente, en la Comuna 13, convertida durante la segunda mitad del siglo XX en receptora de oleadas de población desplazada víctima del conflicto, principalmente proveniente del Urabá antioqueño. La falta de implicación de las diferentes administraciones y la continua despreocupación e insuficientes, cuando no inexistentes, políticas sociales (Gómez, 2012), contribuyeron de forma decisiva a la proliferación de asentamientos urbanos ilegales y a la consolidación de estructuras criminales en disputa por el control de la zona.

La Operación Orión, iniciada el 16 de octubre de 2002, fue diseñada con un claro mensaje ejemplarizante en el marco de la llamada *Política de Seguridad Democrática*, implementada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La actuación del Estado y las fuerzas de seguridad fue ampliamente criticada por la desproporción de los medios empleados, la violencia desplegada contra la población civil y los señalamientos arbitrarios (Sánchez, 2011). Activistas y líderes sociales fueron detenidos sin juicio previo alguno; ciertas de

* Documento enmarcado en el proyecto: «La influencia de la comunicación y el lenguaje en la construcción de imaginarios y modelos sexistas en los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín: estudio a través de la puesta en marcha de un Observatorio contra la Violencia de Género en la Universidad de Medellín» Grupo de Investigación Greco de la Facultad de Comunicación de la misma universidad.

** J. Juárez Rodríguez. Doctor en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Profesor Investigador Universidad de Medellín. Correo-e: jjuares@udem.edu.co

A. Puerta Molina. Doctor en Lengua y Literatura por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Investigador Universidad de Medellín. Correo-e: apuerta@udem.edu.co

estas personas serían retenidas y torturadas durante su cautiverio; otras, como Ana Teresa Yarce, fueron directamente asesinadas. Decenas fueron desaparecidas durante y después del operativo donde la supremacía de las estructuras paramilitares, bajo el amparo del propio Estado y sus fuerzas de seguridad, durante décadas permitió la continuidad de estos crímenes y desapariciones forzadas.

Aún hoy, 16 años después, existen discrepancias sobre el balance real de la violencia dejada por el operativo. Ricardo Aricapa (2005), uno de los periodistas más reconocidos por sus trabajos de investigación sobre las guerras urbanas desarrolladas en Medellín, establece que durante el operativo fueron asesinados cuatro militares, tres civiles y diez milicianos, a lo que habría que sumar treinta heridos, y cerca de 400 detenidos (Aricapa, 2005: 212-213). No obstante, algunos medios de comunicación y organizaciones defensoras de los derechos humanos aumentan estas cifras notablemente, situando el número de heridos por encima de los 200 y en 70 los desaparecidos a manos de paramilitares, y, lo más grave, denuncian la existencia de ejecuciones extrajudiciales y más de 243 detenidos con la complicidad de miembros de las fuerzas militares e integrantes paramilitares (Correa, 2014: 11). Orión se ha convertido en un ejemplo paradigmático de lo que no debe ser, de la complicidad del Estado con estructuras delictivas y la coactuación entre Estado y miembros de grupos paramilitares sobrepasando todas las barreras democráticas e infringiendo las más elementales normas del Derecho Internacional Humanitario.

En todo este proceso de violencia desproporcionada, abusos del propio Estado y desprotección de la sociedad civil, los medios de comunicación han jugado y juegan un papel primordial, ya que adquieren una responsabilidad que va más allá de la mera labor informativa. La difusión de una información veraz, rigurosa y completa se hace imprescindible y se acentúa más si cabe en el contexto actual que vive Colombia, siendo prioritaria una revisión de la funcionalidad de los medios y sus profesionales. Los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad social, más aún en situaciones de vulneración de derechos humanos y agresiones por parte del propio Estado, cuestionando las relaciones de poder y contribuyendo al bienestar general a través de una información seria y rigurosa (Tajahuerce, 2014). Por todo ello, resulta necesario no sólo analizar los hechos acaecidos en la Comuna 13 de Medellín, sino cómo los medios afrontaron y trasladaron esos hechos al conjunto, ya no solo como un ejercicio de reflexión y análisis, sino como una manera para evitar la repetición de errores en la actualidad.

El objetivo principal de la investigación realizada redonda en el análisis de los hechos ocurridos durante la ejecución de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, así como la posible comisión de excesos por parte del propio Estado. Como hemos adelantado, Colombia afronta una etapa crucial para construir un nuevo futuro de prosperidad cimentado en el diálogo como camino para la superación de las diferencias y, en último

término, la violencia, en el que el Estado debe ser garante y ejemplo de defensa y salvaguarda de los derechos fundamentales de los colombianos; la Memoria y el acceso a una información veraz y honesta se presumen herramientas fundamentales. Por ello, una de las hipótesis centrales en las que se ha cimentado la labor investigativa ha sido precisamente en la importancia del papel de los medios de comunicación a la hora de abordar hechos como los denunciados en la capital antioqueña en aquél momento y servir como elemento vertebrador de la verdad y agente de contrapoder que ayude a poner luz en la memoria colectiva colombiana.

La perspectiva cualitativa nos ha ayudado a profundizar en la investigación de los hechos en su contexto, con una observación participante directa en el espacio geográfico que centra nuestro análisis, es decir, Medellín y, más concretamente, la Comuna 13, ejercicio realizado desde una perspectiva etnográfica. Con el objetivo de obtener testimonios y datos inéditos que mejoraran la calidad del trabajo y potenciaran la exclusividad del mismo, hemos interactuado con personas y agentes que intervienen o han intervenido en el fenómeno analizado, entre ellos familiares de las víctimas, investigadores o autoridades del ámbito local. La búsqueda de fuentes de primera mano nos parecía fundamental para conseguir un análisis plural y completo. Paralelamente, nuestra labor investigativa se ha reforzado con el análisis del tratamiento informativo de los hechos de los dos medios escritos seleccionados para nuestra investigación, es decir: *El Tiempo* y *El Colombiano*, estudiando contenidos, lenguaje empleado, fuentes citadas, así como el material gráfico publicado para analizar su enfoque y tratamiento.

El conflicto armado, el paramilitarismo y el papel del Estado

Colombia atraviesa un momento histórico estimulante y, al mismo tiempo, de extrema complejidad después de los acuerdos firmados entre el Gobierno y las Farc-EP, referendados por el Congreso de la República después de cuatro años de proceso negociador. Sin embargo, y siendo precisos en el uso del lenguaje, todavía no puede hablarse propiamente de posconflicto, definido por investigadores de la Universidad del Rosario, como el periodo posterior a la superación de un conflicto armado (Gamboa y Londoño, 2012: 56). El país vive un proceso de transición que debe materializarse, efectivamente, en una etapa de cumplimiento de los acuerdos, superación de la violencia y normalización democrática. Pese al notable descenso de la violencia y los homicidios cometidos por los focos guerrilleros más activos (las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc-, el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y, en menor medida, el Ejército Popular de liberación -EPL-), el Estado no ha podido acabar con la inseguridad y la violencia arrastrada desde hace décadas.

Uno de los grandes problemas denunciados históricamente por colectivos y defensores de los derechos humanos ha sido la pasividad e incluso la complicidad o la participación directa del propio Estado en estos crímenes enmarcados dentro del conflicto armado. El investigador William Ortiz (2006) ha expresado de forma directa los argumentos históricos y políticos para considerar que en Colombia ha existido un paraestado en convivencia con estructuras paramilitares. Lejos de mejorar la situación, la vulneración de los derechos fundamentales de la población civil por parte del propio Estado agravó la situación. El Estado ha sido durante años cómplice de esta violencia y, en vez de garantizar seguridad, protección y defensa a la sociedad civil, acrecentó el miedo, multiplicó los desplazamientos forzados y la desaparición sistemática de personas. Numerosos investigadores, como Olga Behar (2016) o el ya citado William Ortiz (2006), han aportado pruebas y señalado de forma directa los vínculos entre el poder, el narcotráfico y las estructuras paramilitares. El Proceso de Paz con las Farc-EP impulsado por el Gobierno de Juan Manuel Santos tuvo un precedente histórico en el conocido como Proceso de Justicia y Paz impulsado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el cual favoreció la desmovilización de más de 10.000 paramilitares amparados en la Ley 975 de 2005. Como han documentado destacados periodistas e investigadoras, como María Teresa Ronderos (2016), después del proceso de justicia transnacional, fiscales y magistrados lograron resolver crímenes impunes desde hacía varias décadas, y lograron sentar ante un tribunal a congresistas, gobernadores y miembros del Ejército por vínculos con el paramilitarismo (Ronderos, 2016: 26). En la misma investigación, Ronderos cita la diligencia de indagatoria del mayor del Ejército, Óscar Echandía, quien manifiesta que, desde el inicio de los grupos paramilitares, en Puerto Boyacá, miembros del Ejército colaboraron con ellos, les vendieron armas con salvoconductos y los ayudaron a organizarse (Ronderos, 2016: 34). En diferentes lugares del país se ha certificado que miembros del Ejército y paramilitares trabajaron de la mano con el propósito de acabar con la guerrilla.

Después de más de cinco décadas de guerra y dolor envueltas en el silencio y la impunidad, Colombia afronta una etapa de retos, cambios e ilusión. La Justicia Especial para la Paz (JEP) se ha convertido en el foco del debate político y, al mismo tiempo, en la principal herramienta en la búsqueda del esclarecimiento de miles de asesinatos y en la exigencia de justicia, memoria y reparación. En la misma «se ha establecido que para la sanción de criminales por violaciones graves a los derechos humanos e infracciones igualmente relevantes al Derecho internacional humanitario, el Tribunal de Paz —integrado por colombianos— podrá también contar con la participación de juristas extranjeros».

Medellín y la Comuna 13

Medellín se ha consolidado a lo largo de los últimos años como un ejemplo de desarrollo estructural estratégico para dejar atrás una imagen ligada sistemáticamente a la guerrilla,

al narcotráfico y a la violencia que sacudió a la ciudad y al departamento de Antioquia durante, al menos, las últimas tres décadas. La capital antioqueña afronta, de la mano del gobierno nacional, el enorme reto de superar la violencia y la indolencia gubernamental ante los crímenes de Estado documentados y de apostar por la memoria y la justicia como elementos previos e imprescindibles para afrontar una verdadera etapa de superación del pasado y reparación a las víctimas. Si bien se han hecho grandes esfuerzos en este sentido, todavía queda un largo camino por recorrer ya que, como señala el investigador Roberto Moreno (2003), debemos entender el incremento de la violencia registrado en la capital antioqueña, sobre todo a partir de la década de los 90, no como un problema casual o coyuntural sino como resultado de la fusión de muy diversos factores, muchos de los cuales «proviene desde la precaria legitimidad del Estado en todas sus ramas del poder». Muestra de este auge de la violencia y la inseguridad, son los datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Gobierno Municipal que reflejan cómo solo entre 1992 y 1999 (ambos años incluidos) se registraron más 33.000 homicidios, siendo la administración de Luis Alfredo Ramos (1992-1994) la más violenta, con un total de 16.249 asesinatos registrados.

La población medellinense ha sufrido, en primera persona, los efectos devastadores de la interacción de los múltiples actores del conflicto, desde las autodefensas hasta las guerrillas, pasando por estructuras de milicias, combos y una fuerza pública respaldada en la década de los 90 por «Convivir», estructura puesta en marcha por el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, y fuertemente criticada por organismos y defensores de los derechos humanos.

Es en ese marco contextual de despreocupación gubernamental y deslegitimación de las instituciones democráticas entre la población civil en el que se desarrolló la llamada Operación Orión, un operativo realizado por miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia contra las milicias urbanas de las Farc, del ELN y de los CAP.² Supuestamente, también contra las estructuras paramilitares (AUC), aunque, posteriormente, tanto fotografías³ como testimonios de la comunidad han demostrado que las Fuerzas Armadas no solo no actuaron contra las estructuras de las autodefensas, sino que tuvieron la cooperación de estos grupos paramilitares, algunos de ellos infiltrados en la comunidad, que señalaron con el dedo a milicianos y también los lugares en los que supuestamente permanecían.

Situada en el occidente de la ciudad, la Comuna13 ha sido históricamente un punto estratégico para el tráfico de drogas y de armas, lo que ha derivado en una confrontación casi permanente de estructuras delictivas. Su situación geográfica ha sido empleada,

² Comandos Armados del Pueblo

³ Como la tomada por Jesús Abad Colorado (Guarnizo, 2015).

además, como un espacio de entrada para población desplazada proveniente del Urabá antioqueño, lo que ha ido consolidando, a lo largo del tiempo, su condición de Comuna en constante proceso de ampliación, plagada de calles, casas y construcciones levantadas de forma desordenada y arbitraria.

Aunque la parte plana de la Comuna 13 presentó durante la primera mitad del siglo XX algunos desarrollos formales, que evolucionaron en barrios urbanísticamente consolidados y de buena calidad, las lomas fueron objeto de invasiones que dieron lugar a barrios informales como Belencito y la parte alta de El Salado (Martín, 2014: 441).

Las diferentes administraciones mostraron durante décadas una total despreocupación por la zona, despojando a la población de la Comuna de servicios básicos y dejando vía libre a la llegada y posterior consolidación de estructuras delictivas. El arribo de población desplazada víctima del conflicto armado colombiano se tradujo en una altísima densidad poblacional carente de recursos básicos. Datos de la Alcaldía de Medellín estiman que en 2015 la Comuna 13 tenía censados a 138.063 habitantes y más del 63 por ciento de su población era menor de 40 años.

Tal y como señala la investigadora Doris Gómez, la acción gubernamental estuvo marcada históricamente por la indolencia, lo que derivó en «la falta de presencia del Estado, la pobreza y la inequidad social» como caldo de cultivo para una «estigmatización y discriminación social» (Gómez, 2012: 51) que dio pie a que diversas organizaciones armadas tomaran el control de zonas estratégicas (Alonso, Giraldo y Sierra, 2006), surgiendo los conocidos como los CAP, que adquirieron mayor presencia en la década de los 90 en las zonas altas de la Comuna; posteriormente tomaron el control, junto con milicianos de las Farc y, sobre todo, del ELN (Giraldo, 2008), imponiendo un régimen de extorsión en sus habitantes y comerciantes. Tal y como señala el «Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia», elaborado en 2003, debemos englobar estos hechos en un contexto generalizado de incremento de la violencia urbana cimentado, precisamente, en ese flujo de población desplazada, reubicada en grandes urbes como Medellín. Según el citado documento, solo en 2002, se producirían más de 400 muertes violentas (ONU, 2003), lo que muestra el clima de violencia e inseguridad existente, incrementado poco después como consecuencia de la llegada de estructuras paramilitares que disputaron el control de la Comuna.

Estas situaciones se dieron, sobre todo, a partir del año 2000, cuando comenzó a incrementarse la presencia de las redes paramilitares, que pelearon por el control de las zonas estratégicas. La incursión del paramilitarismo provocó una explosión de violencia que hizo que solo en 2001 se documentaran 317 homicidios (Aricapa, 2005) y el despla-

miento forzado de miles de vecinos y vecinas. Pero fue sobre todo en el año 2002 cuando «se agudizaron el conflicto y los desplazamientos en la Comuna 13, cuando las milicias bolivarianas de las Farc, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo prohibieron el ingreso de personas ajenas al barrio. Esa prohibición era, según las milicias, una medida para evitar la influencia paramilitar» (Sánchez, 2010: 26).

La sensación de guerra abierta e impunidad se vio aumentada como consecuencia del fin de los diálogos de paz que hasta ese momento habían sostenido el gobierno del presidente Andrés Pastrana y la guerrilla de las Farc. El cese de las conversaciones derivó en una guerra sin cuartel en la Comuna 13, lo que coincidió con la llegada al gobierno nacional de Álvaro Uribe Vélez, en 2002. Uribe Vélez fue quien implementó la denominada política de Seguridad Democrática, que cimentó las bases para la ejecución de la Operación Orión.

La llegada de Álvaro Uribe al poder y la Operación Orión

Entre enero y octubre de 2002, la Comuna fue objeto de numerosas operaciones policiales y militares encaminadas a la desarticulación de estructuras delincuenciales y a la detención de integrantes de las milicias asentadas en la zona. Algunas operaciones no fueron bautizadas y otras fueron reconocidas por sus consecuencias. La más larga, intensa e incluso con un número de víctimas oficiales superior a Orión fue la Operación Mariscal (Cinep; PPP, 2016) (mayo de 2002), también estuvieron: Potestad (junio de 2002), Antorcha (agosto de 2002), pero la que tuvo más impacto y repercusión mediática fue Orión, desarrollada entre el 16 y el 20 de octubre de 2002.

El operativo, liderado por el Gobierno Nacional, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, contó con la participación de la Fiscalía General de la Nación, integrantes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), más de 1.000 militares, liderados por el general de la IV Brigada, Mario Montoya, y la Policía Metropolitana, al mando de Leonardo Gallego. Durante cuatro días y con el argumento de buscar la pacificación de la zona, se cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos y se utilizaron métodos irregulares como la participación de grupos paramilitares en complicidad con el Estado. Hay, incluso, denuncias de asesinatos y desapariciones forzadas.

En investigaciones posteriores, los propios paramilitares integrantes del Bloque Cacique Nutibara, liderados por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias «Don Berna», han confesado su participación. Los «paras» fueron claves en el desarrollo de Orión. Planificaron y ejecutaron, de manera conjunta con el Estado, detenciones, allanamientos y desapariciones forzosas. El propio «Don Berna» tras la desmovilización del Bloque en el año 2007 declaró que «en esta operación hubo participación de paramilitares que habían realizado un trabajo previo de inteligencia y acompañaban a las autoridades en su labor de allanamiento y captura de supuestos colaboradores de la guerrilla» (Sánchez, 2010: 80). La imagen

tomada por el fotógrafo Jesús Abad Colorado se convirtió en una prueba de lo sucedido durante Orión, ya que muestra a un paramilitar encapuchado, escoltado por miembros del Ejército, mientras señalaba los lugares en los que se escondían los milicianos.

Pese a que la Operación Orión nació bajo la idea de una búsqueda de seguridad y pacificación de la zona, finalmente quienes aprovecharon esta situación fueron los paramilitares pues tomaron el control. Esta idea es compartida por el abogado Juan Camilo Arango (a quien entrevistamos para el desarrollo de la presente investigación), integrante de la Corporación Jurídica y Libertad, que brinda apoyo a una treintena de familias de La Comuna 13 afectadas por el homicidio o la desaparición forzada de alguno de sus integrantes. Al respecto, declaró:

Álvaro Uribe toma posesión y comienza su política de seguridad con la Operación Orión; Llegaron militares, policías, helicópteros, bombardeos... y comenzaron a darse homicidios y a desaparecer gente; ellos mostraron unos resultados y dijeron que se pacificó la Comuna 13, pero no hubo tal pacificación, y con otro ingrediente y es que si bien sacaron a las milicias ingresaron a los paramilitares que trabajaron mancomunadamente con la Brigada (Entrevista realizada por los autores en octubre de 2015 en Medellín, Colombia).

Las imágenes durante la Operación Orión fueron dantescas: helicópteros disparando de manera indiscriminada sobre barrios altamente poblados, ciudadanos que no tenían que ver con el conflicto heridos en medio de las calles o buscando llegar a algún centro asistencial, envueltos en sábanas. La Defensa Civil y la Cruz Roja, con médicos y paramédicos, montaron una enfermería en la calle 35 con la carrera 92 para poder atender a los heridos. En los días posteriores, San Javier y los barrios aledaños estaban militarizados; en la entrada a los barrios de la Comuna 13 había tanquetas y carros militares.

La inseguridad, la falta de información veraz y la ausencia del Estado derivaron en la instauración de un régimen controlado por el paramilitarismo marcado por la multiplicación de las desapariciones forzadas. Tras el proceso de desmovilización de los integrantes de las Autodefensas (paramilitares) bajo el gobierno de Álvaro Uribe, salió a la luz el genocidio⁴ sistemático justificado por razones político-ideológicas, llevado a cabo en la Comuna 13 por parte de sus integrantes contra aquella parte de la población «sospechosa» de no seguir sus postulados y obedecer sus normas, en gran parte de los casos. Según sus propios testimonios, gran parte de los secuestrados fueron llevados a una zona cercana a la Comuna conocida como La Escombrera, donde eran torturados y asesinados

⁴ Entendido, según la RAE, como el «exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad».

para después ser sepultados por toneladas de escombros. Por todo ello, en julio de 2015, la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía pusieron en marcha el proyecto «Escarbando la verdad, desenterrando la Justicia» para buscar en la zona de La Arenera, situada dentro de La Escombrera, los restos de al menos 100 víctimas. Aunque los resultados de la primera fase no fueron positivos, los dispositivos de búsqueda siguen activos.

El periodismo en Colombia

Desarrollando una mirada con perspectiva histórica, podemos detectar como otro gran problema para la identificación de estos abusos del propio Estado ha sido la escasa visión crítica de los medios de comunicación. El primer periódico colombiano apareció en 1785, durante el período de dominio español: una simple hoja de información acerca de un terremoto, de la cual se publicaron 3 números. El segundo intento de periódico fue *La Gaceta de Santafé*, publicada el mismo año, pero tampoco pudo mantener regularidad. El *Papel Periódico* de la ciudad de Santafé de Bogotá, que apareció en 1791 y circuló hasta 1796, fue la primera publicación periódica regular en el territorio de la actual Colombia, dirigida por el periodista Manuel del Socorro Rodríguez, pionero del periodismo en Colombia. Nació en Bayamo (Cuba) el 3 de abril de 1758 y falleció en Bogotá, el 3 de junio de 1819; además de director del *Papel Periódico*, fue bibliotecario público de la Real Biblioteca de Santa Fe de Bogotá y fundador de la tertulia Eutropélica.

Desde un principio, el periodismo tuvo fuertes nexos con la política. Donaldo Donado (2003:54) plantea que: «En Colombia, el Estado, los partidos y la prensa tuvieron el mismo origen, pasaron los mismos avatares, se confundieron e imbricaron de tal manera que no es posible hablar de uno sin referirse a los otros dos». Esta relación marcó la forma en la que se escribían los periódicos, con una prosa panfletaria y opinante. La prensa mantuvo el esquema de servicio al partido al que pertenecía hasta finales del siglo XIX.

La última década del XIX y la primera del XX, en Colombia, transcurrieron con un escenario en el que dominaban guerras, dictaduras, censuras de prensa, la pérdida de Panamá; todos estos sucesos condicionaron el desarrollo del periodismo que estaba muy lejos del estilo informativo que conocemos hoy.

El periodismo informativo nació de la revolución industrial y predominó durante la última mitad del siglo XIX. En Colombia, la reportería, las noticias y las transcripciones de diálogos están muy ligadas a la figura de Carlos Martínez Silva, fundador del periódico *El Correo Nacional*, en 1890. Martínez Silva fue uno de los primeros en romper las costumbres de los periódicos partidistas. No obstante, aún en la actualidad, muchos periódicos mantienen una posición que privilegia a los gobiernos de turno o que rige sus contenidos con base en intereses políticos o económicos.

El asunto es más grave debido a las condiciones de seguridad a las que se enfrentan algunos periodistas que abogan por un periodismo más independiente; ejercer la labor periodística en Colombia se convirtió, sobre todo a partir de la década de los 90, en una profesión de alto riesgo, no solo por el conflicto armado, sino por agentes externos ligados al narcotráfico, las bandas delincuenciales o la corrupción institucional. La situación se agudizó hasta tal punto que el país se convirtió en uno de los espacios más peligrosos para ejercer la labor de reportero. Según un informe del Centro de Memoria Histórica, entre 1977 y el 2015, fueron asesinados 153 periodistas en Colombia.

La responsabilidad y el papel de los medios y de los informadores debe ser hoy más que nunca replanteada y debatida para conseguir desarrollar un periodismo veraz y honesto que evite de forma activa la manipulación y la desinformación. En buena parte de los grandes medios «la información se considera esencialmente una mercancía (...) y ante todo una perspectiva comercial» (Ramonet, 2005: 196), sin olvidar las dimensiones políticas, indispensables para desarrollar un análisis correcto (Sánchez, 2005).

El papel de los medios durante la ejecución de Orión

Los medios de comunicación son los garantes de una sociedad libre y democrática. Solo desde la transmisión honesta, correcta y veraz de los hechos es posible formar a una sociedad libre. Los periodistas hacen que realidades opacadas pasen a ser foco de análisis y cuestionamiento, consiguiendo ser, en cierto grado, jueces sobre lo que es o no importante, filtros sobre lo que debe ser conocido por el conjunto de la sociedad y sobre lo que debe «existir» o no, ya que, como apuntaba el periodista Ryszard Kapuscinski, lo que no se nombra acaba por no existir para el conjunto de la población (Kapuscinski, 2002). De este modo, los medios reflejan la sociedad y son la prueba de la salud democrática del Estado, que se demuestra en la calidad, el desarrollo, la independencia y la pluralidad de estos. Tal y como señala el investigador Germán Rey (2005:24), los medios de comunicación en Colombia han acusado históricamente «problemas en las relaciones con las fuentes, en los mecanismos internos de decisión sobre los enfoques y encuadres de las noticias y en el predominio del registro noticioso sobre otros géneros que son muy poco utilizados». Por todo ello, adquiere una especial relevancia el análisis y la lectura de los hechos documentados entre el 16 y el 20 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín por parte de dos de los medios impresos más influyentes.

Los incidentes relatados durante la Operación Orión supusieron, como ya hemos analizado, todo un manual de agresiones y vulneraciones de derechos humanos fundamentales, condenados posteriormente por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, hemos considerado prioritario desarrollar un análisis (desde una perspectiva cuanti-cualitativa) de las informaciones publicadas por dos de los

principales diarios impresos de Colombia en sus ediciones de Medellín entre el jueves 17 y el domingo 20 de octubre de 2002. Los diarios analizados fueron *El Colombiano* y *El Tiempo*. El primero por ser reconocido por su influencia en la región, de tradición conservadora y que ha informado el acontecer en Medellín y la región antioqueña por más de un siglo, constituyéndose en líder de opinión en la ciudad; en la actualidad, imprime 75.000 ejemplares de lunes a viernes y 90.000 los fines de semana (Gómez, 2012: 57). Por su parte, *El Tiempo* es el periódico de mayor difusión de Colombia, con un tiraje de 200.000 ejemplares, 2.500 empleados, 140.000 suscriptores y 8.000 puntos de venta.

Al desarrollar una lectura cualitativa desde una perspectiva global de las informaciones es necesario plantearnos qué papel juega la ética periodística y qué funciones tiene realmente el periodista a la hora de desarrollar su labor profesional. Como propone el periodista colombiano Javier Darío Restrepo, director del Consultorio Ético de la Fnpi, un comunicador social no puede reducirse a ser un mero transmisor de hechos, un contador de imágenes o un escribano de notas de prensa. Su desempeño profesional requiere de una técnica determinada y compatible con sus fines, ya que «la ética y la técnica son insolubles en el periodismo. La primera es el alma de la segunda e impone actitudes» (Restrepo, 2005: 23). En este sentido, la técnica periodística requiere ineludiblemente una contextualización efectiva para poder analizar los hechos de forma precisa y acertada, ya que, como señala el investigador Xosé López:

El periodismo no actúa como un espejo que lo refleja todo, sino que construye una imagen del mundo y difunde una realidad o realidades forjadas en los medios (...) el papel del periodista se convierte así en un permanente analista un 'filtro' que decide lo que el público debe conocer (...) es una actividad que parece sencilla pero entraña gran complejidad (...) que encuentra muchas dificultades en su actividad —el periodismo— para elaborar su contenido —la información periodística— y garantizar que no manipula —es decir, que no desinforma (López 2010: 23-27).

Es en este punto en el que nos detenemos a la hora de analizar las informaciones recogidas en *El Colombiano*. El medio se limita, en algunas de sus informaciones, a contar lo que plantean las fuentes oficiales sin ejercer un papel de «filtro» imprescindible para desarrollar una labor periodística efectiva y de calidad. Por ejemplo, no incluye voces como la de la ONU y, al contrario, publica un artículo en la página 12A, titulado «Ofensiva militar apenas comienza», cuya fuente principal es el general Mario Montoya Uribe. Además, en la página 5A, incluyen un artículo titulado «Con Uribe: solidaridad y cambios», que apoya incondicionalmente la labor emprendida por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en una posición peligrosa si se tiene en cuenta todo lo que pasó después cuando se demostraron los abusos cometidos por la fuerza pública.

La ausencia de nuevas fuentes, de testimonios inéditos que cuestionen la versión gubernamental resta calidad al tratamiento y, al mismo tiempo, incurre en un posible caso de desinformación, entendida como «la ausencia de verdadera información o de información verdadera» (Galdón 2007: 50). En este sentido, debemos destacar que desinformar no es lo mismo que manipular; hablamos de desinformación para referirnos a una «ausencia de información» mientras que la manipulación implica la difusión de información falsa, lo que incluye «que la información de la que se dispone no es veraz» (López 2002: 85). Podemos afirmar que, en efecto, el medio no manipula, no traslada datos o hechos falsos, sino que se limita a contar lo que las fuentes reproducen y, a través de la observación participante, el periodista narra los hechos, describe lo que observa y se apoya en testimonios de las propias víctimas. Sin embargo, esta pretendida búsqueda de la objetividad informativa, como señala el profesor Gabriel Galdón, cercena:

El relato de las investigaciones de largo alcance, profundas, realizadas con rigor [...] porque su publicación pondría en solfa los estereotipos, simplificaciones y manipulaciones realizadas... es más que probable que al no considerarse noticia (hechos como las mentiras o las negligencias gubernamentales) se haga una breve referencia de trámite... o bien se silencia (Galdón, 1994: 45-46)

De este modo, la ausencia de profundidad en el análisis, sumado a la escasa relevancia de las voces críticas contrarias al fondo y a las formas del operativo, se convierten en factores que propician en el lector cierto grado de desinformación, ya que se obvian aspectos y partes importantes del contexto y los hechos, lo que no ofrece a los lectores información ni capacidad de análisis. En este sentido, la investigadora Doris Gómez (2012:149), al analizar el tratamiento informativo de *El Colombiano* en el período 2006-2009, evidenció que el 40 por ciento de las informaciones publicadas abordaban de forma explícita temas relativos a la seguridad, en las cuales hasta el 50 por ciento de las fuentes consultadas procedían del ámbito gubernamental.

Respecto a las fuentes, *El Tiempo*, además de recurrir a testimonios de los propios vecinos, apuesta por dar voz a personas o entidades que puedan ejercer una labor de fuentes de contrainformación para, de este modo, contrarrestar las versiones aportadas por las autoridades y nombran, además, a Álvaro Uribe Vélez como máximo responsable del operativo. En este capítulo, el medio trata de contrastar las afirmaciones oficialistas con datos o testimonios de víctimas, activistas o especialistas en las áreas analizadas, ejerciendo de este modo un papel de contrapoder, entendido, como señala el investigador Manuel Castells (2009), como la capacidad de distintos actores sociales para desafiar y cambiar las relaciones de poder institucionalizadas en la sociedad, desafiando las estructuras de poder existentes.

El Colombiano basó sus informaciones en testimonios exiguos de habitantes de la Comuna, resaltando aspectos poco informativos, pero muy enfocados en el espectáculo, como hemos analizado, basando sus marcos de interpretación en «la visión institucional de la administración local, acorde con su filosofía y visión empresarial» (Gómez, 170), algo que se dio con menor claridad en *El Tiempo*, el cual, aunque en el segundo día de la ejecución del operativo, viernes 18 de octubre, recogió voces oficiales como la del Alcalde de Medellín y la Ministra de Defensa, también cuestiona y se pregunta por qué hay muertos y capturados de las milicias, pero no de los paramilitares, que también actuaban en la zona:

Varias voces empezaron a escucharse ayer en Medellín para preguntar por qué los actuales operativos de la Fuerza Pública en la Comuna 13 de Medellín van todos dirigidos contra las milicias de la guerrilla, y por qué no se sabe de detenidos, muertos ni heridos de los paramilitares que también están presentes allí (*El Tiempo*, 2002: 3).

Debemos recordar, en este sentido, que el periodismo tiene y adquiere una dimensión social trascendental y que su misión no es solo informar, contar o reproducir un hecho o una declaración. El periodismo es mucho más y por ello presenta innumerables componentes y dilemas a la hora de tomar las decisiones sobre qué es lo importante y cómo debe ser trasladado a la sociedad ya que «el periodista es, antes que un informador, un intérprete del acontecer [...] el periodista aplica reglas de orientación para orientar a los demás [...] es un intérprete del contexto en el que la información se produce» (Caperá y Núñez, 1995: 23). En definitiva, el periodista recurre permanentemente a la ética, entendida, como señala el profesor Javier Darío Restrepo (2005) como la guía que nos marca el deber ser, cuya base son los valores y que es, en todo momento, una opción libre y personal. Por ello, el periodista tiene la enorme responsabilidad y la obligación de trasladar una información completa, ya que, de no ser así, el receptor caerá en la desinformación (López, 2002). Para evitar esto, el periodista debe replantearse y cuestionar los objetivos y las finalidades de ciertas versiones o fuentes informativas. En este caso, *El Colombiano* no tiene esta postura crítica y analítica, fundamental para propiciar un análisis plural y completo de los hechos que evite la desinformación del lector. Por ejemplo, en el artículo «Entre la tensión y la calma» escribe:

Lo que hace un mes parecía imposible, ayer era una realidad que en una procesión de botas ascendía por las escarpadas lomas de los barrios Las Independencias: eran las unidades de la fuerza pública 'retomando' el control de un sector que, antes del miércoles pasado le 'pertenece' a grupos de milicias (*El Colombiano*, 2002: 3A).

En la redacción es evidente la cercanía con las fuentes oficiales y lo más preocupante es que hablan de «informantes que acompañaron a la fuerza pública en las operaciones»,

pero no se detienen a analizar quiénes eran esos informantes que, en buena medida, se comprobó después, eran miembros de los paramilitares que trabajaban en conjunto con la fuerza pública. En este caso, también se evidencia falta de rigor a la hora de desempeñar la labor periodística.

Conclusiones

16 años después de Orión, Colombia atraviesa un momento histórico marcado por los acuerdos de Paz de La Habana que intentan poner punto y final a un conflicto armado de casi seis décadas. La guerra que ha sufrido Colombia a lo largo de todos estos años ha derivado en escenarios de masacres, violaciones de derechos humanos y picos de violencia indiscriminada, consolidando una semilla de dolor permanente en millones de personas. Según datos aportados por la Unidad de Víctimas en su página web, el conflicto colombiano ha dejado a su paso más de seis millones de víctimas. Hoy en día se abre una oportunidad histórica para el diálogo y la reconciliación.

Aunque es cierto que queda mucho camino por recorrer, Colombia se enfrenta al mayor de sus retos recientes: trabajar en la construcción de la Paz y la Reconciliación, lo que exige también justicia, memoria y reparación a las víctimas. En este proceso, Orión y la Comuna 13 son ejemplo de los excesos del Estado y de la falta de claridad que tienen los medios de comunicación en su papel de garantes en la construcción de sociedades verdaderamente democráticas. Podemos confirmar que, tal y como planteábamos en nuestra hipótesis de partida, el Estado no actuó de forma correcta, incurriendo en la comisión de excesos e incluso actos delictivos que han sido, posteriormente, condenados por organismos internacionales.

Por todo ello, la memoria histórica se presume como eje fundamental en este camino hacia la reconciliación y la superación de la violencia en Colombia. Por ello, el periodismo y los medios de comunicación afrontan también un enorme reto, como es el de informar de manera responsable, veraz y, sobre todo, honesta, a la ciudadanía. Su papel en la construcción de la paz se presenta fundamental para consolidar una nueva Colombia alejada de su pasado reciente de terror y odio. Basándonos en la investigación realizada, resulta fundamental que los medios den voz a las víctimas; lo que no se nombra no existe y por ello los periodistas y los medios juegan un papel fundamental en consolidar la reconstrucción de la memoria y conseguir, mediante la visibilización, romper la cadena de desinformación que, lamentablemente, se ha prolongado durante años. El periodismo, para conseguir sus objetivos, no puede ni debe limitarse a reproducir una nota de prensa o una declaración institucional, sino que debe plantearse el porqué de ese hecho, cuestionar los datos y ejercer en todo momento una labor de contrapoder, de lo contrario perderá su esencia, convirtiéndose en un mal relacionista público. Por ello, hay que apostar por un periodismo plural, analítico y comprometido que evite la desinformación y, por supuesto, la manipulación informativa.

Como señalábamos al inicio de este documento, un pueblo solo puede ser libre cuando está realmente informado. Sin información veraz y completa no hay libertad. Por ello, en el contexto actual se hace más necesario que nunca que los periodistas colombianos afronten esta nueva etapa desde el compromiso y la ética, apostando por una labor profesional rigurosa, es decir, que busque no solo la narración de hechos o ser portavoz del Estado, sino que potencien el análisis desde la honestidad y la pluralidad. El periodista no puede limitarse a ser un simple contador de algo amparándose en una supuesta búsqueda de la objetividad. El periodista debe contextualizar y explicar los hechos para que el lector pueda entender e interpretar de forma correcta lo noticioso. Esta postura no implica ni mucho menos alejarse de la búsqueda del camino utópico de la objetividad, que finalmente concluye en un concepto que es absolutamente necesario para el periodismo: la honestidad.

En este propósito es necesario entender que el periodismo va más allá del día a día, de unas noticias que mueren con el atardecer, que tienen una fecha de caducidad casi inmediata. El periodismo es un guardián de la memoria (Puerta, 2011), siendo uno de sus principales fines la transmisión de conocimiento, dejar un testimonio de la época en la que el periodista está escribiendo. En el caso concreto de Colombia, numerosos actores sociales han denunciado de forma reiterada la exclusión y la estigmatización de los medios masivos a la hora de ejercer su función innata de agentes de contrapoder (Molina, 2009).

Para que en Colombia haya paz es necesario reflexionar acerca de todo lo que ha sucedido, una historia de dolor y sufrimiento que ha dejado millones de víctimas. Hay que hacer conciencia sobre las actuaciones de los diferentes grupos armados. Los paramilitares y la guerrilla tienen que decir la verdad y reparar a las víctimas; pero también hay que reflexionar acerca de los desmanes cometidos por el Estado, uno de ellos el caso de la Operación Orión y para este debate necesario, hay que cuestionar también la labor de los medios de comunicación que han tenido una participación parcial y poco honesta, lo que va en contravía de todos los principios del periodismo.

Referencias bibliográficas

- Alonso, M., J. Giraldo y D. Sierra** (2006). «Medellín: el complejo camino de la competencia armada» en Camila de Gamboa, ed., *Justicia transicional: teoría y praxis*. Bogotá, Universidad del Rosario.
- Aricapa, Ricardo** (2005). *Comuna 13, crónica de una guerra urbana*. Medellín. Universidad de Antioquia,
- Behar, Olga** (2016). *Los doce apóstoles*, Colombia, Icono Editorial.
- Capera, José y Núñez José** (2017). «Una perspectiva sobre la violencia en Colombia en épocas del postconflicto». *Utopía y praxis latinoamericana*, año 22 n° 78. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27952381012>.
- Castells, Manuel** (2009). *Comunicación y Poder*. Madrid, Alianza Editorial.
- CINEP** (Centro de Investigación y Educación Popular) y **PPP** (Programa por la Paz) (2016). *Noche y niebla*, Bogotá, Editorial Códice Ltda.

- Correa, Carlos** (2014). *Aprendiz de cronista*, Medellín, Eafit.
- Cortina, Adela** (2009). *Ética de la razón cordial: Educar en la ciudadanía del siglo XXI*. España, Nobel.
- Donado, Donald** (2003). *Crónica anacrónica. Un estudio sobre el surgimiento, auge y decadencia de la crónica periodística en Colombia*, Medellín, Panamericana.
- Galdón, Gabriel** (1994). *Desinformación, método, aspectos y soluciones*, Navarra, Eunsa.
- Galdón, Gabriel** (2007). «La violencia a la realidad. Desinformación y manipulación en los medios de comunicación». *Escuela Abierta*, 10. 49-76, Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2520023>
- Gamboa, Luis Fernando y Joaquin Sebastián Londoño** (2015). «Postconflicto en Colombia». *Desbordes - Revista de Investigaciones de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades - Unad I* vol. 6, enero - diciembre.
- Giraldo, Jorge** (2008). «Conflicto armado urbano y violencia homicida: El caso de Medellín». *Vía, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana*, n° 5, septiembre, pp. 99-113. Quito.
- Gómez, Doris** (2012). «Las agendas sobre la seguridad en la comuna 13 de Medellín (2006 -2009)». Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar al título de Magíster en Ciencia Política. Universidad de Antioquia, Instituto de Estudios Políticos, Maestría en Ciencia Política.
- Guarnizo, José** (2015). «La foto que destapó los desmanes de la operación Orión», *Revista Semana*, 15 de agosto. Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/articulo/la-foto-que-dejo-al-descubierto-los-desmanes-de-la-operacion-orion/438656-3>
- Kapuscinski, Ryszard** (2002). *Los cínicos no sirven para este oficio: Sobre el buen periodismo*. Barcelona, Anagrama.
- López, Marcelo** (2002). «Desinformación e información falsa», en José Ángel Agejas y Francisco José Serrano, coord., *Ética de la Comunicación y de la Información*, Barcelona, Ariel.
- López, Xosé** (2010): *La metamorfosis del periodismo*. Sevilla, Comunicación Social. Ediciones y publicaciones.
- Molina, Jesús María** (2009). *Comunicación y construcción de lo público en Colombia*. Colombia, Facultad de investigaciones Escuela Superior de Administración Pública de Bogotá.
- Moreno, Roberto** (2003). «Conflicto y violencia urbana en Medellín desde la década del 90: Algunas valoraciones», en *Violencias y conflictos urbanos: un reto para las políticas públicas*, pp.191-232, Colombia, Instituto Popular de Capacitación, .
- ONU** (2003). «Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia». Consejo Social y Económico de la Naciones Unidas.
- Ortiz, William** (2006). «Los paraestados en Colombia», Tesis Doctoral, Facultad de Sociología y Ciencias Políticas, España, Universidad de Granada.
- Puerta, Andrés** (2011). «El periodismo narrativo o una manera de dejar huella de una sociedad en una época». *Revista Anagramas*, vol. 9, n° 18, pp. 47-60. Universidad de Medellín.
- Ramonet, Ignacio** (2005). «El poder mediático» en Denis De Morales, *Por otra comunicación: los media, globalización cultural y poder*. Barcelona, Icaria-Intermón.
- Restrepo, Javier Darío** (2005). *El zumbido del moscardón*. Colombia. Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano.
- Rey, G.** (2005). *El cuerpo del delito*. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung - Centro de Competencia en Comunicación para América Latina.
- Ronderos, María** (2016). *Recicladas Guerras. Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia*. Bogotá, Aguilar.
- Sánchez, Gonzalo**, coord. (2011). *La huella invisible de la guerra: Informe del Grupo de Memoria histórica de la Comisión Nacional de la Reparación y Reconciliación*, Colombia, Taurus.

Tajahuerce, Isabel (2014). *Mujeres y comunicación*, Madrid, La Linterna Sorda.

Otros fuentes consultadas

Amnistía Internacional (2015). «Colombia: restituir la tierra, asegurar la paz. Los derechos territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes», Reino Unido.

Amnistía Internacional (2015). «Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?», Colombia.

Angarita, Pablo Emilio (2003). «Conflictos, guerra y violencia urbana: interpretaciones problemáticas», *Revista Nómadas*, n° 19, Universidad Central Bogotá, Colombia, pp.96-104.

CINEP (2010). «Comuna 13, la otra versión, Colombia, Noche y Niebla». *Revista del Centro de Investigación y Educación Popular, Bogotá*.

El Tiempo (2015). «Audiencia de EL TIEMPO continúa en crecimiento», 7 de junio. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/gente/audiencia-de-el-tiempo-continua-en-crecimiento/15907306-xcesos-articulo-674055>

Durán, Diana y Santiago Martínez (2017) «Corte Interamericana condena al Estado por abusos en la Comuna 13 de Medellín», *El Espectador*, 10 de enero. Disponible en: <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-interamericana-condena-al-estado-abusos-y-excesos-articulo-674055>.

Herrán, Teresa y Javier Darío Restrepo (1992). *Ética para periodistas*, Colombia, Tercer Mundo Editores.

Insuasty, Alfonso, Jesús Balbín, Wilder Bastidas, Jaime Carrión, Judith Juárez, Javier, Nestor Restrepo y Nora Botero (2017). «Los movimientos sociales de mujeres y su consolidación como interlocutor y actor político en la construcción de la paz en Medellín (Colombia)», *Revista Izquierdas*, 34, pp. 1- 25. Chile. Disponible en: <http://izquierdas.cl/images/html/n34/index34.html>

Martin, Gerard (2014). *Tragedia y resurrección. Mafias, ciudad y Estado. 1975-2013*, Medellín, La Carreta.

Melamed, Janiel (2017). «Diferencias entre el modelo de justicia transicional aplicable a las FARC-EP y el aplicado a las Autodefensas Unidas de Colombia en Izquierdas», *Revista Izquierdas*, 33:151-171. Chile. Disponible en: <http://izquierdas.cl/images/html/n32/index32.html>

Pineda y Walter Mejía (2010). *Las víctimas en contextos de violencia e impunidad. Caso Medellín. Colombia*, Ipc- Fundación Forjando Futuros- Universidad San Buenaventura- Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación- Personería de Medellín.

Puerta, Andrés. (2019) «Crónica latinoamericana. ¿Existe un boom en la no ficción?» *Revista Estudios sobre el mensaje periodístico*, vol. 23, n° 1.

Ruiz, Jaime y Beatriz Vélez (2004). *Fronteras invisibles de exclusión y violencia*. Medellín. Centro de Estudios de Opinión.

Revista Semana (2014) «Seis millones de víctimas deja el conflicto en Colombia». 8 de febrero. Disponible en: <http://especiales.semana.com/periodistas-asesinados/www.semana.com/nacion/articulo/victimas-del-conflicto-armado-en-Colombia/376494-3>

Universidad del Rosario. «Experimentos sobre reconciliación política en Colombia». Disponible en: <http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/jurisprudencia-reconciliacion/ur/Postconflicto/>.